

NOTA DE PRENSA 19/11/2020

AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PATERNA TRATAN DE FORMA HUMILLANTE Y ABREN PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN O EXPULSIÓN A MIGRANTES QUE PIDEN EL DNI PARA SUS BEBÉS

Funcionarios de la comisaría de la policía nacional de Paterna tratan de forma humillante e intimidatoria a personas migrantes que acuden a solicitar el DNI para sus bebés, les dificultan los trámites y, además, les incoan un procedimiento de sanción o expulsión por estancia irregular.

València Acull ha tenido conocimiento de la situación sufrida recientemente por dos mujeres colombianas que, tras reunir toda la documentación requerida, fueron a pedir el DNI para sus hijos a la comisaría de Paterna: los policías les presionaron para que desistieran, les acusaron de aprovecharse de la legislación española, les recomendaron no recurrir a un abogado, las sometieron a un interrogatorio inapropiado y, finalmente, a una le abrieron un expediente con una propuesta de multa de 501€ y a la otra, la “expulsión del territorio nacional”. En el calabozo de esta misma comisaría fue encerrada en febrero de 2019 para ser deportada de forma exprés, Carmen Leigue, una mujer boliviana de 63 años que llevaba 17 años viviendo en València, trabajadora del hogar y de los cuidados, y con dos hijos y tres nietos españoles. El respaldo ciudadano a la iniciativa contra su expulsión impulsada por la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones logró su liberación.

Sandra (nombre ficticio) acudió el pasado 3 de noviembre a la comisaría para tramitar el DNI de su bebé, pero le dijeron que volviera al día siguiente porque no estaban los funcionarios que realizan esa gestión. Sandra llevaba la inscripción de su hijo en el registro donde figura el reconocimiento por presunción de la nacionalidad española para el pequeño. El Código Civil español establece la nacionalidad por presunción cuando el país de origen de los padres no se la concede a sus hijos o hijas si nacen en el extranjero, como es el caso de Colombia; el artículo 17 determina que son españoles de origen: c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad; d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.

nota de prensa

Por esta razón, Sandra, con su bebé en brazos, se puso en la cola frente a la comisaría el día 4. Un policía se le acercó y le preguntó a qué venía. Se lo explicó, pero mientras le hacía salir de la cola, le dijo que no tenía que sacar el DNI “y que me iban a dar la carta de expulsión”. Llamaron a otro funcionario, que se la llevó a un despacho para iniciarle el procedimiento por estancia irregular. Este policía consideró una “tontería que te haga una orden de expulsión cuando de aquí a un día o dos o una semana tu hijo va a tener nacionalidad y me vas a pedir el familiar comunitario. Entonces, te vamos a poner una multa”. Además, le dijo que había tenido “toda la suerte del mundo” porque hasta hace pocos días sólo se podía proponer la expulsión. El agente se refería a la sentencia del pasado 8 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impide a España expulsar inmigrantes sólo por estar en situación irregular. Sandra trató de explicarle su situación y que el padre de su bebé también es colombiano y ha solicitado asilo “porque es desplazado por la guerrilla”. “Como todos, como todos...”, dijo el policía y le recriminó que tanto su marido como ella se aprovechan de la legislación: “La ley española dice que no debería ser así que tu hijo sea español, pero tú te aprovechas de una vez más de la ley de tu país, pues es lo que hay, ahora tienes que pagar una multa”. Sandra se sintió muy ofendida porque entendió que el agente le había acusado de utilizar a su hijo como un medio para acceder a la residencia; el policía lo negó, pero insistió en que “te aprovechas de que tu país no reconoce a tu hijo para que le den la nacionalidad española, lo demás lo has dicho tú. Pues si te aprovechas, pues tendrás que pagar una multa”. Y prosiguió inmutable tramitando la sanción.

Cuando acabó el papeleo, le informó de que disponía de 15 días de plazo para presentar alegaciones y podía buscar un abogado. Sandra le dijo, entre sollozos, que no podía pagar un abogado porque estaba recurriendo a Cáritas para poder comer y el agente contestó: “Yo te recomiendo que no lo hagas, básicamente por una cosa muy sencilla, te va a cobrar dinero, y al fin y al cabo hay un hecho muy sencillo... Ahora te voy a hacer una copia de tu pasaporte, donde hay un sello de entrada del 28, y aquí no hay más. Puedes alegar lo que quieras, pero es lo que hay”. Además, le dio a entender que debería estar agradecida porque no la había detenido y proponía una cuantía de multa mínima. Sin embargo, este funcionario no sólo incumplió la normativa de no hacer valoraciones sobre el caso que estaba instruyendo sino que ni verbalmente ni en el expediente se le informó a Sandra de su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita. El agente concluyó: “En cualquier caso, has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico... al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios, pues oye, ahora te toca pagar 500 euros, pues oye, después de todo lo que has recibido pagar 500 euros tampoco es tanto. Al final, lo que tú veas... Lloro todo lo que quieras, di que esto es racismo, es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay...” Sandra se tuvo que ir sin el DNI de su bebé porque el policía le dijo que ya era “muy tarde”. Al día siguiente, se armó de valor y volvió a por el documento.

Una situación humillante similar vivió Lucía (nombre ficticio) días antes en la misma comisaría. Tampoco la atendieron la primera vez y tuvo que ir al día siguiente, 30 de octubre, a tramitar el DNI de su hijo. Directamente se la llevaron para incoarle el expediente por estancia irregular no sin antes espetarle que “tú eres colombiana, tu hijo también y no puede tener DNI español”, a pesar de mostrarle al policía la inscripción del registro de presunción de la nacionalidad española; “decía que ese documento no es válido”, asegura Lucía. Este agente se dedicó a hacerle todo tipo de preguntas personales (quién era el padre, su nacionalidad, estudios, ¿por qué estaba tan grande el niño?, por dónde había entrado a España...) innecesarias para el procedimiento que estaba instruyendo. El policía concluyó el expediente con una propuesta de expulsión que vulnera lo establecido por la sentencia del TJUE y, además, no la dirigió a hacer el trámite del DNI, que era para lo que Lucía había acudido ese día a comisaría. Finalmente, obtuvo la documentación para su bebé en la comisaría de Mislata, donde la policía le dijo que sus compañeros de Paterna “no debían haberme hecho eso. La verdad es que lo que me ocurrió en la comisaría de Paterna fue horrible, denigrante, humillante...”, afirma Lucía. Una abogada de oficio presentó alegaciones y el expediente de expulsión fue archivado.

Las actuaciones policiales descritas no sólo suponen un trato humillante para las víctimas y una conculcación de sus derechos sino que vulneran la intención de las reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que las personas migrantes en situación irregular puedan acudir a denunciar delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin miedo a que se les incoe un expediente sancionador. Aunque en este caso las dos madres sólo iban a realizar un trámite amparado por la ley, resulta cuestionable que la misma policía que debe atenderlas aproveche esa circunstancia y centre su gestión en comprobar su situación administrativa y en sancionarlas. Estas situaciones generan desconfianza en la policía y deja en absoluta desprotección a las personas en situación administrativa irregular no sólo para denunciar delitos sino para realizar todo tipo de trámites.

Por todo ello, València Acull exige:

-Que cese este tipo de prácticas en la comisaría de Paterna y en cualquier otra dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitiendo que cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, acuda a denunciar o realizar cualquier tipo de trámite sin temor a ser sancionada o expulsada.

-Que se adopten medidas disciplinarias contra los agentes implicados en las irregularidades cometidas en estos dos casos.

Se adjunta extractos de la conversación entre una de las víctimas y un policía (voces distorsionadas) y los procedimientos incoados a las dos mujeres.

NOTA DE PREMSA 19/11/2020

AGENTS DE LA POLICIA NACIONAL DE PATERNA TRACTEN DE MANERA HUMILIANT I OBRIN PROCEDIMENT DE SANCIÓ O EXPULSIÓ A MIGRANTS QUE DEMANEN EL DNI PER ALS SEUS BEBÉS

Funcionaris de la comissaria de la policia nacional de Paterna tracten de manera humiliant i intimidatòria a persones migrants que acudeixen a sol·licitar el DNI per als seus bebés, els dificulten els tràmits i, a més, els incoen un procediment de sanció o expulsió per estada irregular.

València Acull ha tingut coneixement de la situació patida recentment per dues dones colombianes que, després de reunir tota la documentació requerida, van anar a demanar el DNI per als seus fills a la comissaria de Paterna: els policies les van pressionar perquè desistiren, les van acusar d'aprofitar-se de la legislació espanyola, les van recomanar no recórrer a un advocat, les van sotmetre a un interrogatori inapropiat i, finalment, a una li van obrir un expedient amb una proposta de multa de 501€ i a l'altra, l'"expulsió del territori nacional". En el calabós d'aquesta mateixa comissaria va ser tancada al febrer de 2019 per a ser deportada de manera expressa, Carmen Leigue, una dona boliviana de 63 anys que feia 17 anys que vivia a València, treballadora de la llar i de les cures, i amb dos fills i tres nets espanyols. El suport ciutadà a la iniciativa contra la seua expulsió impulsada per la Campanya pel Tancament dels CIE i la fi de les deportacions va aconseguir el seu alliberament.

Sandra (nom fictici) va acudir el passat 3 de novembre a la comissaria per a tramitar el DNI del seu bebé, però li van dir que tornara l'endemà perquè no estaven els funcionaris que realitzen aquesta gestió. Sandra portava la inscripció del seu fill en el registre on figura el reconeixement per presumció de la nacionalitat espanyola per al xiquet. El Codi Civil espanyol estableix la nacionalitat per presumció quan el país d'origen dels pares no li la concedeix als seus fills o filles si naixen a l'estranger, com és el cas de Colòmbia; l'article 17 determina que són espanyols d'origen: c) Els nascuts a Espanya de pares estrangers, si tots dos mancaren de nacionalitat o si la legislació de cap d'ells atribueix al fill una nacionalitat; d) Els nascuts a Espanya la filiació dels quals no resulte determinada. A aquest efecte, es presumeixen nascuts en territori espanyol els menors d'edat del qual el primer lloc conegut d'estada siga territori espanyol.

Per aquesta raó, Sandra, amb el seu bebé als braços, es va posar en la cua enfront de la comissaria el dia 4. Un policia se li va acostar i li va preguntar a què venia. Li ho va explicar, però mentre li feia eixir de la cua, li va dir que no havia de traure el DNI "i que m'anaven a donar la

carta d'expulsió". Van cridar a un altre funcionari, que se la va emportar a un despatx per a iniciar-li el procediment per estada irregular. Aquest policia va considerar una "ximpleria que et faça una ordre d'expulsió quan d'ací a un dia o dos o una setmana el teu fill tindrà nacionalitat i em demanaràs el de familiar comunitari. Llavors, et posarem una multa". A més, li va dir que havia tingut "tota la sort del món" perquè fins fa pocs dies només es podia proposar l'expulsió. L'agent es referia a la sentència del passat 8 d'octubre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que impedeix a Espanya expulsar immigrants només per estar en situació irregular. Sandra va tractar d'explicar-li la seua situació i que el pare del seu bebé també és colombià i ha sol·licitat asil "perquè és desplaçat per la guerrilla". "Com tots, com tots...", va dir el policia i li va recriminar que tant el seu marit com ella s'aprofiten de la legislació: "La llei espanyola diu que no hauria de ser així que el teu fill siga espanyol, però tu t'aprofites una vegada més de la llei del teu país, perquè és el que hi ha, ara has de pagar una multa". Sandra es va sentir molt ofesa perquè va entendre que l'agent l'havia acusat d'utilitzar al seu fill com un mitjà per a accedir a la residència; el policia el va negar, però va insistir que "t'aprofites que el teu país no reconeix al teu fill perquè li donen la nacionalitat espanyola, la resta ho has dit tu. Doncs sí que t'aprofites, doncs hauràs de pagar una multa". I va prosseguir immutable tramitant la sanció.

Quan va acabar la paperassa, la va informar que disposava de 15 dies de termini per a presentar al·legacions i podia buscar un advocat. Sandra li va dir, entre sanglots, que no podia pagar un advocat perquè estava recorrent a Càritas per a poder menjar i l'agent va contestar: "Jo et recomane que no ho faces, bàsicament per una cosa molt senzilla, et cobrarà diners, i al cap i a la fi hi ha un fet molt senzill... Ara et faré una còpia del teu passaport, on hi ha un segell d'entrada del 28, i ací no hi ha més. Pots al·legar el que vulgues, però és el que hi ha". A més, li va donar a entendre que hauria d'estar agraïda perquè no l'havia detinguda i proposava una quantia de multa mínima. No obstant això, aquest funcionari no sols va incomplir la normativa de no fer valoracions sobre el cas que estava instruint sinó que ni verbalment ni en l'expedient es va informar Sandra del seu dret a sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta. L'agent va concloure: "En qualsevol cas, has estat treballant, no has estat cotitzant, no has estat pagant una Seguretat Social, si t'has posat malalta has anat al metge... al final és el que hi ha, tu et vas aprofitant de les coses, no et jutge, però t'has estat aprofitant d'uns beneficis, doncs mira, ara et toca pagar 500 euros, doncs mira, després de tot el que has rebut pagar 500 euros tampoc és tant. Al final, el que tu veges... Plora tot el que vulgues, digues que tot açò és racisme, és xenofòbia, el que tu vulgues, però t'has estat aprofitant d'ací durant ics temps i és el que hi ha..." Sandra es va haver d'anar sense el DNI del seu bebé perquè el policia li va dir que ja era "molt tard". L'endemà, es va armar de valor i va tornar pel document.

Una situació humiliant similar va viure Lucía (nom fictici) dies abans en la mateixa comissaria. Tampoc la van atendre la primera vegada i va haver d'anar l'endemà, 30 d'octubre, a tramitar el DNI del seu fill. Directament se la van emportar per a incoar-li l'expedient per estada irregular no sense abans etzibar-li que "tu eres colombiana, el teu fill també i no pot tindre DNI espanyol",

malgrat mostrar-li al policia la inscripció del registre de presumpció de la nacionalitat espanyola; “deia que aquell document no és vàlid”, assegura Lucía. Aquest agent es va dedicar a fer-li tota mena de preguntes personals (qui era el pare, la seua nacionalitat, estudis, per què estava tan gran el xiquet?, per on havia entrat a Espanya...) innecessàries per al procediment que estava instruint. El policia va concloure el expedient amb una proposta d'expulsió que vulnera el que s'estableix per la sentència del TJUE i, a més, no la va dirigir a fer el tràmit del DNI, que era per al que Lucía havia acudit aquell dia a comissaria. Finalment, va obtindre la documentació per al seu bebé en la comissaria de Mislata, on la policia li va dir que els seus companys de Paterna “no havien d'haver-me fet això. La veritat és que el que em va ocórrer en la comissaria de Paterna va ser horrible, denigrant, humiliant...”, afirma Lucía. Una advocada d'ofici va presentar al·legacions i l'expedient d'expulsió va ser arxivat.

Les actuacions policials descrites no sols suposen un tracte humiliant per a les víctimes i una conculcació dels seus drets sinó que vulneren la intenció de les reiterades recomanacions del Defensor del Poble al Ministeri de l'Interior perquè les persones migrants en situació irregular puguen acudir a denunciar delictes a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat sense por al fet que se'ls incoe un expedient sancionador. Encara que en aquest cas les dues mares només anaven a realitzar un tràmit emparat per la llei, resulta qüestionable que la mateixa policia que ha d'atendre-les aprofite aquesta circumstància i centre la seua gestió en comprovar la seua situació administrativa i en sancionar-les. Aquestes situacions generen desconfiança en la policia i deixa en absoluta desprotecció a les persones en situació administrativa irregular no sols per a denunciar delictes sinó per a realitzar tot tipus de tràmits.

Per tot això, València Acull exigeix:

-Que cessen aquest tipus de pràctiques en la comissaria de Paterna i en qualsevol altra dependència de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat permetent que qualsevol persona, independentment de la seua situació administrativa, acudisca a denunciar o realitzar qualsevol tipus de tràmit sense por de ser sancionada o expulsada.

-Que s'adopten mesures disciplinàries contra els agents implicats en les irregularitats comeses en aquests dos casos.

S'adjunta extractes de la conversa entre una de les víctimes i un policia (veus distorsionades) i els procediments incoats a les dues dones.